

N/REF: 0004/2023

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El anteproyecto de ley remitido tiene por objeto establecer, en el ámbito de competencias estatales, las bases de ordenación del sector industrial, así como los criterios de coordinación entre las administraciones públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.1.^a y 13.^a de la Constitución Española, lo que se concreta en los siguientes objetivos específicos:

- a) La garantía y protección del ejercicio de la libertad de establecimiento de las empresas industriales.
- b) La protección de la libre circulación de productos industriales, la garantía de la unidad de mercado y la coordinación administrativa.
- c) El fomento de un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas en el territorio español, que permita acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales necesarios, así como su resiliencia, y en particular de las pequeñas y medianas empresas.
- d) La promoción de un entorno favorable a la cooperación entre empresas, la generación de ecosistemas industriales, y el impulso de proyectos tractores y de interés general.
- e) La promoción industrial y la mejora de su competitividad y resiliencia, así como favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de la tecnología e innovación y la transición verde y digital.
- f) La internacionalización de la empresa industrial, así como la atracción de inversiones estratégicas y tractoras de la economía.
- g) La promoción y control de la seguridad y calidad industrial.
- h) El régimen general de responsabilidad industrial.
- i) La planificación estratégica de la actividad industrial y la salvaguardia de la base industrial que suministra recursos de primera necesidad y de carácter estratégico.
- j) El fortalecimiento institucional de los agentes y sistemas de gobernanza del ecosistema industrial y la colaboración entre ellos.

La aprobación de la Ley se enmarca en la medida C12.R1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C12.R1 Estrategia Española de Impulso Industrial 2030), y contribuye al hito #176 de la Decisión de Ejecución del Consejo (en adelante CID) de 13 de julio que aprueba el PRTR.

I

El marco normativo aplicable a los tratamientos de datos de carácter personal que puedan realizarse al amparo de la norma proyectada está constituido, con carácter general, por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

A estos efectos, debe reseñarse que el anteproyecto no contiene mención alguna a la normativa sobre protección de datos personales, ni la Memoria de análisis de impacto normativo hace referencia alguna al posible tratamiento de este tipo de datos ni analiza el posible impacto que pueda tener la misma en este derecho fundamental.

No obstante lo anterior, la aplicación de la ley puede implicar el tratamiento de este tipo de datos, atendiendo a la amplia definición de dato personal que nos ofrece el artículo 4 del RGPD:

«datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

Quedan, en consecuencia, excluidas de su protección las personas jurídicas, pero su ámbito protector se extiende a las personas físicas que las representan, cuyos datos personales deben ser tratados con sujeción a lo previsto en dicho Reglamento.

La protección conferida por el Reglamento (UE) 2016/679 comprende también a los empresarios individuales, a diferencia de la normativa anterior, en

la que el artículo 2.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real decreto 1720/2017, de 21 de diciembre, excluía de su ámbito de aplicación los datos de los empresarios individuales, cuando el tratamiento de los datos a ellos referentes lo fuera en su calidad de comerciantes, industriales o navieros. El Reglamento (UE) 2016/679 no establece ninguna exclusión en este sentido, de modo que el tratamiento de los datos personales relativos a los empresarios individuales debe someterse a las previsiones contenidas en esta norma.

Por consiguiente, en la medida en que, para el ejercicio de las competencias que atribuye el anteproyecto remitido, sea necesario el tratamiento de datos personales de personas físicas, resultará de aplicación la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

A estos efectos, destaca la regulación contenida en el artículo 32 sobre el Visualizador de Suelo Industrial, como instrumento centralizado de captación de datos sobre el suelo industrial y sus dotaciones, el cual contendrá información sobre las zonas industriales, las infraestructuras de comunicaciones, digitales, energéticas y de ciencia e innovación, pudiendo ser consultada por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y el público en general:

Artículo 32. Visualizador de Suelo Industrial.

- 1. Con el fin de facilitar la inversión industrial se crea, bajo la dependencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Visualizador de Suelo Industrial como instrumento centralizado de captación de datos sobre el suelo industrial y sus dotaciones.*
- 2. El Visualizador de Suelo Industrial contendrá información sobre las zonas industriales, las infraestructuras de comunicaciones, digitales, energéticas y de ciencia e innovación, entre otras.*
- 3. Los sujetos titulares y operadores de infraestructuras energéticas aportarán la información sobre sus instalaciones y su capacidad en el formato y periodicidad determinado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La información sobre instalaciones y capacidad en suelo industrial de los operadores de comunicaciones electrónicas será facilitada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.*
- 4. El Visualizador de Suelo Industrial podrá comunicarse con los sistemas de las comunidades autónomas. Tanto la Administración General del Estado, como las comunidades autónomas, podrán consultar la información almacenada en todos estos sistemas. Asimismo, el Visualizador dispondrá de un acceso para el público en general.*

El texto remitido no especifica si el Visualizador incluirá datos de carácter personal. En el supuesto de que se incluyan, deberán tenerse en cuenta las consideraciones del presente informe al respecto. En caso contrario, como garantía específica debería incluirse expresamente que no se incluirán datos de carácter personal.

Por otro lado, debe hacerse referencia al Registro Integrado Industrial, actualmente regulado por el Título IV de la vigente Ley de Industria y por su Reglamento aprobado por el Real Decreto Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, al cual el Anteproyecto dedica el Título V, cuyos fines recoge el artículo 54:

- a) Integrar la información sobre la actividad industrial en todo el territorio español que sea necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de supervisión y control a las administraciones públicas competentes en materia industrial, en particular sobre aquellas actividades sometidas a un régimen de comunicación o de declaración responsable.*
- b) Constituir el instrumento de información sobre la actividad industrial en todo el territorio español, como un servicio a las administraciones públicas, los ciudadanos y, particularmente, al sector empresarial.*
- c) Suministrar a los servicios competentes de las Administraciones Públicas los datos precisos para la elaboración de los directorios de las estadísticas industriales, en el caso estatal a las que se refieren los artículos 26 g) y 33 e) de la Ley 12/1989, de 9 mayo, de la Función Estadística Pública.*

En el presente caso, no hay duda del posible tratamiento de datos de carácter personal en el Registro, tal y como resulta de la regulación de su contenido en el artículo 55, el cual contempla, además, que los datos tengan carácter público:

Artículo 55. Ámbito y contenido.

1. El Registro Integrado Industrial comprenderá las actividades e instalaciones a las que se refiere el artículo 3 con excepción de las comprendidas en su apartado 2. i) y en él deberán constar como mínimo los siguientes datos:

- a) Relativos a la empresa: número de identificación, razón social o denominación, domicilio y actividad principal.*
- b) Relativos al establecimiento: número de identificación, denominación o rótulo, datos de localización, actividad económica principal.*

2. Asimismo, el Registro contendrá los datos análogos a los indicados en el apartado anterior referidos a los Organismos de Control y otros agentes, en materia de seguridad y calidad industrial.
3. Todos los datos anteriormente expresados, excepto los referidos a las empresas y actividades citadas en el artículo 3.2.d), tendrán carácter público, de acuerdo con los procedimientos de acceso y difusión que reglamentariamente se determinen.
4. Además de los datos básicos referidos en el apartado 1, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio determinará reglamentariamente los datos complementarios que deban incorporarse de oficio al Registro, a fin de dar cumplimiento al artículo 54.1.a).
5. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá crear, reglamentariamente, las secciones necesarias en el Registro para que tanto los órganos competentes de las comunidades autónomas, como los actores implicados, remitan información sobre actuaciones de mantenimiento, inspección, o similares encaminadas a la elaboración de estudios sobre seguridad industrial.

De este modo, tanto en el supuesto de que se trate de empresarios individuales, como en el supuesto de que los Organismos de Control, conforme a lo previsto en el artículo 45, sean personas físicas, se estarán tratando datos de carácter personal.

Dicho tratamiento será lícito conforme a lo previsto en el artículo 6.1.e) del RGPD, el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, viniendo atribuida la competencia por una norma con rango de ley, tal y como exige el artículo 8.2. de la LOPDGDD.

Asimismo, deberá cumplirse con el resto de los principios de protección de datos personales contenidos en el artículo 5 del RGPD:

1. Los datos personales serán:
 - a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);
 - b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines
de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);
 - c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);
 - d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación

los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);

f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).

II

En virtud de lo señalado en los apartados anteriores, debería incluirse una **disposición adicional** referida al tratamiento de datos personales, en la que se recoja que **los tratamientos de datos personales regulados en la presente ley se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.**

Asimismo, conforme al criterio reiteradamente manifestado por esta Agencia, se considera conveniente que se proceda, con la asistencia del delegado de protección de datos del departamento proponente, a la identificación de los distintos tratamientos de datos de carácter personal y al análisis de los riesgos que puedan derivarse de los dichos tratamientos, incluyendo en la MAIN un análisis de riesgos que permita identificar las garantías oportunas que permitan cumplir con los principios de protección de datos personales y trasladarlas, en su caso, a la citada disposición adicional.